

Titular de Seguridad afirmó el lunes que la política de ese sector del gobierno anterior es "suficiente" Analistas ven costos por "reconocer" a Boric, pero valoran "tono de Estado" de Arrau

Si bien expertos destacan que la política sea a largo plazo, Pablo Ortúzar (IES) prevé una semejanza entre los dichos de Arrau y las llamadas "vueltas de carnero" que Boric "nunca explicó" durante su mandato.

A. ASTUDILLO y O. RODRÍGUEZ

El primer "flanco" de Martín Arrau

Polémica ha causado la afirmación del ministro Martín Arrau de que la política de seguridad elaborada durante la administración del Presidente Gabriel Boric es "suficiente".

"Hay que recordar que la Ley 21.730, que tiene poco más de un año, que es la que crea este ministerio, obliga a varias cosas", dijo el ahora titular de Seguridad en la Moneda, a propósito de la normativa que se promulgó el 27 de enero de 2025.

Arrau fue enfático al señalar que existe una Política Nacional de Seguridad Pública que "está vigente, la promulgó el Presidente Boric, dura seis años, y nosotros creemos que esa política es suficiente, es amplia, da espacio para ciertas políticas, para ciertos planes, programas, en fin, que se puedan implementar en el futuro. Por tanto, en nuestra posición vamos a operar bajo esa política que hoy día está vigente, que le quedan más de cinco años de funcionamiento".

La afirmación reforzó la ofensiva desplegada por exministros del Presidente Boric contra la actual administración. La exvocera Camila Vallejo, por ejemplo, publicó en X que "el gobierno de Kast por fin dice cuál es su Plan de Seguridad: el plan del gobierno de Boric. Parece chiste" (ver página C 4).

SEIS AÑOS dura la Política de Seguridad Pública que promulgó el gobierno anterior.

La principal promesa de campaña de Kast fue mejorar la seguridad de los chilenos. Y desde que su equipo se instaló en La Moneda han sido críticos en la gestión de la administración anterior en esa materia.

Para el investigador del Instituto de Estudios Públicos (IES), Pablo Ortúzar, "no necesariamente" la declaración del ministro Arrau le da "crédito" al gobierno de Boric. Esto, argumenta el antropólogo, se debe a que "es distinto decir que la legislación es suficiente como marco para la acción a considerar a que la acción del gobierno anterior fue suficiente".

Sin embargo, el analista previene que los dichos de Arrau pueden asemejarse a las llamadas "vueltas de carnero" del ex presidente Boric. "Los republicanos, como oposición, siempre dispararon a la bandada con críticas generales y muy vehementes, por lo que es esperable que esto les abra un flanco político", advirtió Ortúzar.

A su juicio, durante estos 70 días de Gobierno "es más o menos claro que no había un plan más allá de tratar de gestionar lo mejor posible el ministerio. Es muy pronto para juzgar que han fallado en ese objetivo, pero claramente es una realidad bastante menos grandiosa que la que proyectaron con grandilocuencia mientras fueron oposición".

JORGE BURGOS
 EXMINISTRO DEL INTERIOR DEL SEGUNDO GOBIERNO DE MICHELLE BACHELET

PABLO ORTÚZAR
 INVESTIGADOR DEL IES

FRANCISCA WERTH
 EXDIRECTORA EJECUTIVA FISCALÍA NACIONAL



En medio de las críticas, ayer el ministro Martín Arrau llegó a Estación Central, donde encapuchados habían quemado un bus del transporte público. "Hay personas que están dispuestas a todo para reivindicar causas", advirtió.

"Tono de Estado, y no de trinchera"

Ayer, el propio titular de Seguridad respondió a estas críticas. "Confundir los términos me llama mucho la atención (...). A la gente, estos papeles y estas discusiones políticas... no hay cosa que le importe menos. Lo que importa es la efectividad, ver la mejora de las cifras", aseguró.

El director ejecutivo del IES, Claudio Alvarado, considera una "buena noticia" la declaración de Arrau. Primero, porque "reivindica la existencia de una política nacional de seguridad pública que no depende del gobierno de turno"; y segundo, porque, a su juicio, lo que produce la afirmación del ministro es "dotar de un tono de Estado, y no de trinchera, al discurso del Gobierno en seguridad".

Jara, a su turno, valora que "terminado el tiempo de la vociferación" el mandatario "haya comprendido que esta es una política de Estado que corresponde gestionar con amplitud".

Para el director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, utilizar la política desarrollada por el gobierno anterior "no implica necesariamente ausencia de plan propio", pues "lo relevante será conocer cuáles son las medidas concretas que este Gobierno propone para enfrentar los desafíos actuales y, sobre todo, cómo implementará esas medidas".

Desde el Poder Ejecutivo, el subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, defendió a Arrau, argumentando que es "extremadamente trabajador". Sobre la política de seguridad, planteó que "si usted no tiene personal, tiene problemas (...). Tenemos cuatro mil carabineros menos que cuando partió el gobierno anterior, eso es real. Y usted, para hacer planes, tiene que tener personas".

"La declaración del ministro Arrau fue correcta y valiente (...). Osada, probablemente, para quienes desde el oficialismo siguen creyendo que todo hay que hacerlo desde cero".

"Es más o menos claro que no había un plan más allá de tratar de gestionar lo mejor posible el ministerio (...). Claramente es una realidad bastante menos grandiosa que la que proyectaron con grandilocuencia mientras fueron oposición".

"Desde una mirada técnica, se agradece que exista cierta continuidad. Todos estos temas son de largo plazo y requieren de tiempos de planificación y diseño, pero sobre todo de implementación".

Continuidad de medidas es bien vista desde el plano técnico, pero cobran importancia nuevos anuncios

Remarcando su análisis desde un punto de vista técnico, expertos y exautoridades valoran que se mantengan las políticas públicas en el marco de la seguridad.

Así, el exministro del Interior Jorge Burgos sostiene que "la continuidad no es mala per se. Da cuenta de la mantención de una política más allá de los períodos presidenciales, por cierto que habrá espacios para nuevas estrategias, énfasis".

Mientras que el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, coincide, y asegura que "la continuidad en seguridad no solo es sensata, sino necesaria. Los países que logran avances sostenidos en reducción de violencia y

crimen organizado suelen construir políticas de Estado y no únicamente políticas de gobierno".

El exfiscal y director del Cescro de la USS, Luis Toledo, añade que "la continuidad es más una necesidad que una debilidad. Las organizaciones criminales no funcionan con ciclos electorales".

Sistema penitenciario y delitos complejos, debieran ser nuevos ejes

Pero todos coinciden en que hay desafíos importantes de cara a los anuncios que prepara el Ejecutivo en la Cuenta Pública y en el Congreso.

Al respecto, Johnson plantea que actualmente enfrentamos "fenómenos asociados al control territorial por parte de organizaciones criminales, además de delitos altamente visibles y violentos como encerronas, turbazos y extorsiones. Eso exige respuestas rápidas en materia de control policial, inteligencia e investigación penal".

No obstante, identifica también desafíos "estructurales e institucionales", detallando que "uno de los más urgentes es la situación del sistema penitenciario. El alto nivel de ocupación y la creciente presencia de crimen organizado dentro de las cárceles generan riesgos reales de colapso y difi-

cultan cualquier estrategia efectiva de reinserción y control criminal".

Coincide con lo anterior la ex directora ejecutiva de la Fiscalía Nacional Francisca Werth, quien sostiene que tres prioridades serían la "reforma penitenciaria, sobre todo el traspaso de Gendarmería a Seguridad y la gobernanza del sistema; énfasis en la coordinación interinstitucional de las instituciones de sistema de justicia penal, y énfasis en prevención social en niños y jóvenes".

Toledo, en tanto, añade que el debate comienza a desplazarse hacia una segunda etapa de reforma, "donde la discusión ya no se centra únicamente en crear delitos o aumentar sanciones, sino en

fortalecer la arquitectura procesal para enfrentar fenómenos complejos: investigaciones más sofisticadas, mejor inteligencia criminal, persecución patrimonial, coordinación interinstitucional y mecanismos de evaluación permanentes".

Johnson señala que el Gobierno, además, deberá "equilibrar medidas reactivas con políticas preventivas de largo plazo", y advierte que "concentrarse únicamente en respuestas de corto plazo puede generar efectos limitados o transitorios. El desafío de fondo es fortalecer las capacidades permanentes del Estado para enfrentar una criminalidad que hoy es más violenta, más organizada y más adaptable que hace algunos años".